

Por su parte, el artículo 14.1 k) de la meritada Ley de Transparencia también permite limitar el derecho de acceso cuando la información requerida afecte a la garantía de la confidencialidad y el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.

En relación con este precepto, es público y notorio que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) está realizando una auditoría sobre el asunto que motiva la petición, que incluye al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, E.P.E. (ADIF), información que está accesible en: <https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-09022023-0809>

En sede del referido procedimiento se ha hecho entrega de la documentación solicitada. Correspondería entonces a la Administración competente, atendiendo a dicho procedimiento, valorar lo que debe considerarse información pública o susceptible de publicación. Y en ese contexto, el hecho de que se esté llevando a cabo esa auditoría por parte del MITMA, según lo previsto en el *Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales*, exige que por esta entidad se extreme el rigor en la aplicación del límite al derecho de acceso mencionado. En concreto, cabe destacar que la información solicitada se encuentra amparada por el deber de sigilo profesional regulado en el artículo 14 del citado real decreto, el cual, si bien es exigible al personal que realiza las funciones de auditoría, se extiende a todos los datos, antecedentes, informes y, en definitiva, a toda la información que está siendo objeto de inspección. Aplicando dicho deber al caso que nos ocupa, cabe concluir que la documentación requerida se encuentra afectada por ese deber de sigilo profesional, siendo su entrega y difusión susceptible de afectar al correcto desarrollo de dicha auditoría. En consecuencia, procede aplicar el límite al derecho de acceso previsto en el artículo 14.1 k) de la Ley de Transparencia y acordar la desestimación de la solicitud de acceso planteada.

4º.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Madrid, en la fecha de la firma electrónica.

El Gerente de Área de Relaciones Institucionales de RENFE-Operadora E.P.E.

BUENO ILLESCAS 

D. Sergio Bueno Illescas

En virtud de delegación, según la Resolución de 12 de enero de 2023, de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora, E.P.E., sobre delegación de competencias, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 21 de 25 de enero de 2023.